

como la que atravesamos, es la decisión popular de avanzar hacia el socialismo.»

El mismo día 5 de marzo, el siguiente de las elecciones, el entusiasmo de las masas recibe un balde de agua fría. En todos los cordones industriales, comandos comunales, consejos campesinos y juntas de abastecimientos y control de precios se habían organizado reuniones para «analizar el resultado electoral y dar un salto adelante en la formación del poder popular», bajo la forma general de «mejorar nuestra preparación para afrontar la contrarrevolución armada». Pero estas discusiones se hicieron inocuas porque no pudieron comenzar, ya que el propio presidente Allende y la directiva del partido comunista, iniciaron ese día una violentísima campaña contra «los ultraizquierdistas» que «objetivamente» le hacen el juego al imperialismo y a la oligarquía. Y se comenzó una campaña por volver por otro camino a la consigna de «Hacer la revolución es producir». Se lanzó la de «y ahora, a producir para la revolución».

Poco a poco, los ecos de octubre, que habían renacido en marzo, se fueron apagando para volver a la pugna entre los conceptos de si prepararse para la lucha contra el fascismo armado «es una provocación» o «es una acción revolucionaria». Y los días siguieron pasando sin que a la conspiración que se desarrollaba en el seno de las Fuerzas Armadas, con un gigantesco apoyo de las oligarquías de Estados Unidos, Brasil, Argentina, Bolivia y Venezuela, además de la chilena, fuera tomada como un peligro real, y ante la cual no había otra defensa que la movilización de los trabajadores de manera correcta para esa condición objetiva.

### *Los generales, okey*

A la semana siguiente de las elecciones, el grupo de generales en contacto directo con los emisarios del Pentágono, se reunieron varias veces para determinar sus próximos pasos. Una cuestión estaba clara: los políticos civiles habían fallado, no existía esperanza alguna de que Allende fuera destituido por las maniobras de los Frei, Jarpa y demás parlamentarios. Por eso mismo, había que cumplir con las órdenes del Pentágono: hacer el trabajo completo, a cara descubierta, y sin escudarse en los otros grupos de la oligarquía chilena y del imperialismo norteamericano.

En verdad, ya no había angustia en los generales y almirantes. Mientras los políticos se dedicaban en enero y febrero a su campaña electoral, los generales y almirantes se habían dedicado a «estudiar» y a «reflexionar». Habían echado un vistazo a la historia de Chile, en lo corrido del siglo, a la situación latinoamericana y mundial. Habían profundizado en la historia del movimiento obrero, del movimiento campesino y de los partidos de izquierda del país. Habían estudiado los problemas económicos y las crisis periódicas del sistema en la nación. Habían buscado luces... ¡y las encontraron! Fue en un folletito llamado «La Nueva República», que era sencillamente el programa presidencial del candidato derrotado en 1970, Jorge Alessandri Rodríguez. Los generales estaban de acuerdo con los planteamientos generales de esa «nueva República», producto del pensamiento del presidente más conservador que tuvo Chile en los últimos treinta y cinco años.

Las ideas principales escritas en «La Nueva República» eran éstas: «Sólo un gobierno autoritario», que imponga «orden», «disciplina» y «rechazo a la politiquería» podrá resolver los problemas de Chile.

«Se trata, entonces, de sustituir la lucha de clases divisionista por una vigorosa conciencia nacional, eminentemente unitaria y solidaria...

»El aporte del capital extranjero al desarrollo económico permite hacer crecer la inversión sin necesidad de postergar los beneficios sociales a una población que los necesita.

»La unidad, la solidaridad y la ulterior movilización de los chilenos serán posibles únicamente si son precedidas por un vigoroso renacer del espíritu nacional.»

Por ejemplo, «los jóvenes estudiarán más y marcharán menos».

«Son muchos los factores que conspiran contra la nacionalidad. El más importante es aportado por el marxismo internacional, representado en Chile por los partidos socialista y comunista».

Estas citas de La Nueva República eran buenas para los generales que habían dicho *okay* al Pentágono.

Pero no lo decían todo. No decían, por ejemplo, que los generales pensaban que el «desquiciamiento de nuestra sociedad» había comenzado a ser un factor grave no solamente desde 1970, con la inauguración del Gobierno de «los factores que conspiran contra la nacionalidad», «los partidos comunista y

socialista», sino desde mucho antes, desde 1964, cuando «la Democracia Cristiana, un partido que tiene claras vinculaciones internacionales que lo pueden hacer antipatriótico, dejó en libertad las fuerzas del desquiciamiento con la sindicalización campesina, la reforma agraria sobrepasada y su populismo que soliviantó las aspiraciones del pueblo, con un deslumbramiento que atentó contra el orden».

No decían tampoco que los generales pensaban que, por eso mismo, porque el proceso de «desquiciamiento» había sido tan largo, ya todo el cuerpo de nuestra sociedad está corrompido por falta de «unidad nacional». Que habían sido los «políticos de todos los partidos» los que, por afanes electorales o por deseos de aparecer como «progresistas y avanzados», se constituían en los verdaderos responsables de la situación y que, por esta razón, el país necesitaba «un saneamiento total». Tampoco decían que los generales chilenos estimaban correcta la apreciación de los generales del Pentágono de que «las Fuerzas Armadas eran la única organización coherente, nacionalmente uniforme, que podía emprender la tarea de la reconstrucción del país»; y que no había ninguna combinación política civil que estuviera en condiciones de emprender una tarea, después de derrocado Allende, que llegara a la meta de desarticular todos los factores del «desquiciamiento»; es decir, la organización sindical obrera y campesina, las juntas de abastecimientos y control de precios, consejos campesinos, consejos comunales, cordones industriales y partidos políticos de izquierdas.

En suma, los generales en contacto directo con el Pentágono estaban de acuerdo en los siguientes puntos principales:

1) El Gobierno que reemplazara al de Salvador Allende debía ser solamente militar, con la inclusión de las tres armas y de Carabineros.

2) Este nuevo Gobierno debía buscar apoyo en los civiles solamente considerándolos como técnicos en materias específicas, y no como miembros de partidos políticos.

3) Todas las ideologías «foráneas» deberían ser erradicadas de Chile, con la acción «moralizadora» de las Fuerzas Armadas.

4) La crisis económica tenía una sola salida: la de que todos los chilenos se pusieran a trabajar, sin tener ninguna oportunidad de participar en discusiones políticas, y que los países occidentales, encabezados por Estados Unidos, prestaran un sustancial apoyo financiero.

5) Para conseguir ese apoyo financiero había que dar «segu-

ridades al capital extranjero», comenzando por discutir una compensación «razonable» a las compañías norteamericanas del cobre, cuyo mecanismo podría ser anulando el descuento de las rentabilidades «excesivas» planteadas por Allende. (Esto significaba que se dejaba de restar 774 millones de dólares a las indemnizaciones fijadas en octubre de 1971. Es decir, Chile debería pagar a la Anaconda y la Kennecott una cantidad cercana a los 500 millones de dólares.)

La segunda parte de las discusiones de los generales en la primera y segunda semanas de marzo de 1973, estuvo centrada en cómo llevar a la práctica esas ideas.

Como primera medida, se estableció la de iniciar una labor de «convencimiento» de los generales «constitucionalistas» que todavía seguían apoyando la tesis del comandante en jefe, general Carlos Prats, de «ir forzando las cosas hasta llegar a un Gobierno de Salvador Allende con las FF.AA.». Carlos Prats había informado al cuerpo de generales, en múltiples ocasiones, sobre todo a partir de octubre de 1972, que «hace falta esperar un poco. El presidente Allende ha dicho en reiteradas ocasiones que está aburrido ya de los partidos que lo acompañan, porque no son capaces de dirigir al pueblo por el camino del orden social y la dedicación al trabajo». Carlos Prats expresaba su opinión, a los mandos que se la quisieran escuchar, que el presidente Allende «está llegando a un punto en que se quedará solo, y no tendrá más alternativa que gobernar con las Fuerzas Armadas». Carlos Prats había informado, pocos días antes de las elecciones de marzo que, a su manera de ver, «Allende es un brillante político, de muy buenas intenciones, que desea lo mejor para su pueblo y que tiene la decisión total de impedir una insurrección sangrienta, ya sea de parte de los extremistas de derecha como de los extremistas de izquierda».<sup>2</sup>

Para los generales «reformistas» y «duros» todas estas informaciones del comandante en jefe del Ejército no eran más que justificaciones para «sus ambiciones personales». Lo que Carlos Prats deseaba, según estos altos mandos militares, es transformarse en el «delfín» de Allende, llegar a 1976 como el candidato presidencial de los partidos de izquierda. Las ambiciones personales «están haciéndole traicionar a la institución», argumentaban personajes como Manuel Torres de la Cruz.

Entonces, todo les indicaba que era correcto dejar fuera de juego a su comandante en jefe, aislarlo de sus simpatizantes en el cuerpo de generales, y sacarlo del buque en el momento in-

dicado para dar el golpe y derrocar a Allende. En ese momento, el general Augusto Pinochet Ugarte, jefe del Estado Mayor y segunda antigüedad del Ejército, aparecía como «constitucionalista», y los conjurados decidieron centrar sobre él la mayor fuerza de las presiones para conseguirlo como aliado, sobre todo para evitar el efecto de debilidad que tendría el insurreccionar a las Fuerzas Armadas descabezando a las dos antigüedades más altas del Ejército.

Del mismo modo, se acordó «trabajar» a los mandos de Carabineros, y se eligió a César Mendoza Durán, como «el primer contacto», ya que había demostrado tener una alta capacidad de odio respecto a Salvador Allende y un neto repudio «a los marxistas».

Respecto a su participación en el Gabinete de Salvador Allende, estimaron que había que pedirle que formara uno sin militares, presentándole la idea de que «ya las Fuerzas Armadas cumplieron con el propósito de garantizar unas correctas elecciones generales y de pacificar los ánimos a partir de octubre pasado». Pero, al mismo tiempo, decidieron dejar en sus puestos a los demás militares que estaban en cargos estatales de responsabilidad con un doble objetivo: el de mantener información fresca «y oportuna» sobre las maniobras internas de los altos funcionarios de la Unidad Popular, y anular influencia en la tropa de los mandos leales a Salvador Allende, que habían mostrado sus simpatías «extremistas» a partir de octubre de 1972; y que, como en el caso del general de aviación Alberto Bachelet Martínez, nombrado por Allende en la Secretaría Nacional de Distribución, estaban «dando un mal ejemplo de lealtad a los extremistas» al conceder entrevistas en las que se avalaban las ideas de quienes pensaban que las Juntas de Abastecimientos y Control de Precios, formadas por «el populacho», debían ser quienes controlaran la buena distribución de los alimentos en el país. (El general Bachelet fue apresado el día 11 de septiembre, cuando se presentó al Ministerio de Defensa, llevado al campo de torturas de la aviación en la base aérea de Los Cerrillos hasta octubre, y en seguida trasladado a la Cárcel Pública, donde murió el 12 de marzo de 1974, al no poder recuperarse del brutal castigo físico a que fue sometido por los equipos de interrogadores de la Fuerza Aérea chilena.)

Cuando los generales en contacto con el Pentágono estaban discutiendo estos detalles de su operación para derrocar a Allende, los principales mandos de tropas del Ejército, espina

dorsal del complot, estaban distribuidos de la siguiente forma. De norte a sur:

División Blindada, con asiento en Iquique, de la provincia de Tarapacá. Comandante de división el general de brigada Carlos Forestier Haebggen, del grupo de los «duros».

Primera División, con sede en Antofagasta, provincia de Antofagasta. Comandante de división el general Joaquín Lagos Osorio, del grupo de los «constitucionalistas» y entusiasta partidario de la tesis del general Carlos Prats González de formar un Gobierno Allende-FF.AA.

Segunda División, con asiento en Santiago, provincia de Santiago. Comandante en jefe el general de brigada Mario Sepúlveda Squella, jefe del Servicio de Inteligencia Militar, del grupo de los generales «reformistas», violento partidario de la desaparición de los políticos civiles de todos los colores, pero con serias contradicciones con otros generales «reformistas», como Herman Brady Roche, en la lucha por el liderato de la situación, lo que le hacía acercarse al general Carlos Prats. Era, junto con el general Guillermo Pickering, jefe de los Institutos Militares, el único «reformista» que planteaba abiertamente que «el derrocamiento debe darse en dos etapas» —la primera un Gobierno Allende-FF.AA., y la segunda con las Fuerzas Armadas solamente—, «a fin de evitar un derramamiento de sangre inútil». El general Sepúlveda Squella era, al mismo tiempo, comandante en jefe de la guarnición de Santiago, que comprende ocho regimientos. De ellos, la Escuela de Suboficiales, el Regimiento Blindados Número 2 y la Escuela de Telecomunicaciones, estaban comandadas por coroneles del grupo de los «duros»; la Escuela de Paracaidismo y Fuerzas Especiales, por un coronel «reformista»; y la Escuela de Infantería, los regimientos Buin, Tacna y Ferrocarrileros de Puente Alto, por coroneles «constitucionalistas».

Tercera División, con asiento en la ciudad de Concepción, provincia de Concepción. Comandante en jefe el general de brigada Washington Carrasco Fernández, del Servicio de Inteligencia Militar, del grupo de los generales «reformistas» y ligado estrechamente al Pentágono.

División de Caballería, con asiento en la ciudad de Valdivia, provincia de Valdivia. Comandante en jefe el general de brigada Héctor Bravo Muñoz, aparentemente del grupo de los «constitucionalistas» pero, de hecho, en el grupo de los «reformistas», haciendo el juego de infiltrado en el primer grupo, mo-

tivado por razones de ambición personal. Era otro de los comandantes de división en estrecho contacto con el Pentágono.

Quinta División, con asiento en la ciudad de Punta Arenas, provincia de Aisén. Comandante en jefe el general de división Manuel Torres de la Cruz, del grupo de los «duros», virtual jefe de éstos, mientras aparecía como «amigo personal de Allende» y «gran apoyo» para el general Prats. Torres de la Cruz sería encargado de «experimentar» en su división la actuación conjunta de Ejército, Fuerzas Aéreas, Marina y Carabineros contra las organizaciones obreras, vistiendo las operaciones del inocente ropaje de «allanamientos en busca de armas para cumplir la ley sobre control de armas y explosivos».

Como se ve, ya en la primera quincena de marzo de 1973, la alianza de los grupos «reformista» y «duro», más la posición personal del «constitucionalista» Bravo Muñoz, daba un abrumador dominio a los generales que habían decidido decir *okey* al Pentágono y derrocar a Salvador Allende.

Por eso no sorprende la tranquilidad con que los conspiradores tomaron la tarea, y la lentitud con que fueron montando una a una todas las piezas de su maquinaria infernal para dejarla caer sobre el pueblo de Chile en el momento preciso. Actuaban sobre seguro.

Y tanta fue su tranquilidad, que pudieron llegar al perfeccionismo de actuar con los políticos civiles que los estaban empujando al golpe desde 1970, haciéndoles creer que ellos, los generales eran un instrumento de esas figuras políticas. El caso que revela toda la dimensión de lo que afirmo es el de Eduardo Frei Montalva, jefe de la fracción más reaccionaria de la Democracia Cristiana. Los generales actuaron en forma tan impecable en este sentido, que Eduardo Frei, aun dos o tres semanas después del golpe del 11 de septiembre, estaba convencido de que al derrocamiento de Allende seguirían rápidamente las elecciones y él sería el candidato de «salvación nacional». Con este propósito Eduardo Frei trabajó hasta el agotamiento desde el Senado de Chile, donde llegó con las elecciones del 4 de marzo de 1973, para convencer a los generales que derrocaran a Allende. Los generales, durante la conspiración, le hicieron creer que así era en efecto, y obtuvieron lo que querían: apoyo masivo de las organizaciones controladas por esos grupos políticos reaccionarios. Fueron tremendas las alabanzas que en los primeros días después del golpe hicieron a los «militares salvadores de la Patria» los políticos, organizaciones y perio-

distas democratacristianos. Dieron discursos, se pasearon por el mundo y escribieron libros para alabar a los «héroes con uniforme». Sólo meses después, ya en diciembre, se dieron cuenta con angustia de que habían sido utilizados por los generales, que estaban fuera del juego y, lo más horrible, que habían estado glorificando a un grupo de personas que dirigían una carnicería humana contra centenares de miles de chilenos. Carnicería tan enorme que tenía horrorizado al mundo. Se dieron cuenta que cada palabra escrita en favor de los militares después del 11 de septiembre, equivalía al cadáver de un civil chileno, a una mujer violada por la soldadesca, los oficiales e incluso por mandos de altísima graduación, a un hombre castrado con bayoneta, a un cadáver flotando sobre el río Mapocho con las manos atadas a la espalda y la huella de una ráfaga de ametralladora en su pecho, a un Salvador Allende asesinado con planificación fría, a un Pablo Neruda dejado morir por negársele atención médica, durante cinco días, para que ocurriera específicamente eso: que muriera.

### *Ahora o nunca*

Pero no fueron sólo los altos mandos militares chilenos los que se reunieron rápidamente después de la noche del 4 de marzo de 1973. Los dirigentes máximos de la Sociedad de Fomento Fabril, de la Sociedad Nacional de Agricultura y de la Confederación Nacional de la Producción y el Comercio también lo hicieron. Y en sus reuniones, la tesis que habían planteado después del paro de octubre de 1972, quedó reconfirmada, La tesis de que «es imposible derribar a Salvador Allende por medios constitucionales». Es decir, que el fracaso de los políticos tipo Frei y Jarpa para cumplir con el encargo de la oligarquía y el imperialismo norteamericano, demostrado en octubre, había vuelto a demostrarse en marzo.

Se decidió entonces concentrar todos los esfuerzos en empujar a las Fuerzas Armadas contra Allende. Los monopolistas industriales, comerciales, financieros y agrícolas de Chile razonaron de dos maneras:

1) Solamente si hay un verdadero caos económico, político y social las Fuerzas Armadas se verán obligadas a intervenir y pondrán a Allende.

2) Una vez depuesto Allende, las Fuerzas Armadas se encar-